

San Juan Ixhuatepec: Nobleza Y Abusos

dicembre de 1984

POR MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA



Todavía no se apagan las llamas del terrible incendio provocado el 19 de noviembre por el escape de gas en una instalación aún no precisada oficialmente en el pueblo de San Juan Ixhuatepec, al norte del Distrito Federal. El fuego físico quedó sofocado rápidamente. Pero las consecuencias de la más terrible tragedia que nos haya afectado colectivamente están todavía en curso, vivas, como las quemaduras no cicatrizadas de miles de víctimas a las que debemos tener presentes.

Inmediatamente después del accidente, organización estatal y solidaridad popular fueron las notas dominantes de la situación: A pesar de que era lunes, y día de puente (ya que el veinte de noviembre, martes, era feriado) las oficinas federales y del Esta-

do de México a las que correspondió enfrentar el terrible acontecimiento actuaron con rapidez y eficacia. El fuego fue controlado con exactitud y arrojo; los habitantes de la zona alejados de la región del desastre (en una operación de traslado masivo que requirió capacidad de decisión y movilidad material de las cuales se dispuso); evitados los saqueos que amenazaban producirse, y organizados los auxilios médicos y sociales. De ese modo, el gravísimo percance no tuvo consecuencias adicionales inmediatas que hubieran podido agravarlo. Por lo que hace a la gente, ésta se volcó materialmente en ayuda de sus hermanos dañados por el siniestro. Apenas se tuvo noticia de la magnitud del desastre, auxilios de toda clase, aún sangre para la atención de los lesionados, llegaron con sobrada generosidad.

Empezó a formarse en bases la estadística lúgubre de los muertos y desaparecidos. No se conoce con precisión hoy el número de personas que fallecieron, no sólo porque la naturaleza del suceso hizo que muchas de ellas quedaran reducidas a la nada sino también porque la cultura de la pobreza prevaleciente en la zona (hacinamiento, falta de registros sociales, ocultamiento de personas) dificulta hacer un censo que permitiera establecer la cifra de los habitantes y conocer, en consecuencia, quiénes faltan.

El espléndido modo de reaccionar del gobierno y de la sociedad en los primeros momentos, sin embargo, amenaza convertirse en comportamientos deplorables si no se les ataja a tiempo. En primerísimo lugar, ha de darse sitio a la investigación que establezca de manera inequívoca la causa y el lugar del siniestro. Tanto Pemex como la gasera Unigas pudieran estar involucrados, pues hay indicios en uno y otro sentido. El director de la empresa petrolera pública, reaccionando adecuada aunque tardíamente (en las primeras horas se mostró falto de control, seguramente por las dimensiones del acontecimiento) ofreció asumir la responsabilidad civil y moral de los daños causados, aunque reservó para el fin de las investigaciones la responsabilidad jurídica plena que es preciso fincar. Documentos hechos conocer esta semana por el ingeniero Heberto Castillo, que consisten en actas de la Comisión de Seguridad de Petróleos Mexicanos, refuerzan la posibilidad de que las pésimas condiciones de la instalación de ese organismo en San Juan Ixhuatepec fuesen ya conocidas y que por consecuencia se hubiera obrado con negligencia que resultó criminal. Las actas por sí mismas no muestran culpabilidad en la generación del estallido, pero son una

pieza documental que la Procuraduría de la República no podrá dejar de tener en consideración en sus indagaciones y cuando rinda el dictamen que se espera.

Pero el ocultamiento de los orígenes y el fincamiento de las responsabilidades de la tragedia del 19 de noviembre no sería la única consecuencia indeseable. Ya ahora mismo se están produciendo otras. La demagogia, por ejemplo. Aunque es encomiable la rapidez con que se entregaron las primeras casas para reponer a los damnificados el hogar que perdieron, quizá el apresuramiento esté conduciendo a generar errores que es posible evitar. Tengamos en cuenta lo inapropiado de simplemente entregar las viviendas a personas que habitaban alojamientos precarios, pues el tránsito de una situación a otra es más que una simple mudanza. En casos así hay que recordar el episodio de una trabajadora social sorprendida porque después de la entrega de casas a marginados a quienes se sacó de tugurios, comprobó que seguían durmiendo en la estancia, hacinados, en vez de ocupar las pequeñas recámaras de que constaban las nuevas instalaciones. "Es que no tenemos cobijas para todos", explicaron los avergonzados ocupantes de las flamantes casas. Acaso no sea ese precisamente el problema en Ixhuatepec, pero tenían que haberse instrumentado soluciones que tuvieran presentes todos los factores en juego, incluido de modo primordial el entorno social y cultural en que vivían los damnificados. Desarraigarlos de la zona donde muchos de ellos vivieron toda su vida, después del trauma de perder familia y bienes, puede generar consecuencias anímicas que no es posible soslayar.

Se dirá que esas son sofisticaciones. Que lo importante es la ayuda material. Admitiendo que así sea, también respecto de ella hay que tener cuidado. En los primeros días posteriores a la desgracia empezó a generarse un clima de abuso. Algunos de los afectados quisieron sacar provecho de su tragedia. Pero también quisieron hacerlo autoridades menores. Indigna leer algunas mantas colocadas muy visiblemente en las unidades habitacionales donde se congregan ahora algunas de las víctimas. "Gracias al Presidente de la República" por esas habitaciones, se lee en ellas. Es seguro que el Ejecutivo obró en cumplimiento de su deber, y que no espera que se le agradezca nada, porque del hecho que provocó el que debiera prestarse ayuda todos debíamos estar avergonzados y no esperando gratitudes. Por lo demás, mucha gente que no ha recibido auxilio en la medida que supone posible y necesaria, ha realizado mítines en que se plantean interrogantes sobre el destino de muchos bienes que fueron donados por particulares y agrupaciones inclusive del extranjero.

Traficar con el dolor ajeno es una conducta que no debíamos permitir en ningún caso. El uso político de una situación como la surgida en San Juan Ixhuatepec es reprochable en todos los casos. No tienen derecho a utilizar demagógicamente el pesar y las carencias de las víctimas los partidos políticos, pero tampoco (porque es más ilegítimo) es admisible que haya funcionarios capaces de sacar raja de un suceso tan delicado y de consecuencias tan graves.

De ese trágico percance podemos sacar, así sea costo muy alto, enseñanzas provechosas. No dejemos que la saludable reacción colectiva del primer momento aparezca como una casualidad o como un error. No nos neguemos a conocer, maduramente, las condiciones que generaron la tragedia, ni su verdadera magnitud. Es absurdo que se hagan especulaciones sobre el número de muertos sin fundamento en la realidad, pero ésta debe ser explorada lo más posible para saber quiénes murieron. Y hagamos que los auxilios sirvan realmente a quienes todavía sufren dolor de cualquier especie.